

Algunas notas acerca del origen de la Concertación de Partidos por la Democracia

Serie Minutas N° 42-22, 18/07/2022

por David Vásquez V

Resumen

A partir de 1983, los partidos opositores al gobierno militar entraron en una dinámica de organización progresiva que canalizó el descontento social a través de protestas y paros, para luego centrarse en la movilización político electoral que llevó al triunfo de los opositores, y a la configuración de un conglomerado que de referente opositor, pasó a pacto de gobierno, en un paulatino proceso de aprendizaje y maduración política.

Disclaimer: Este trabajo ha sido elaborado a solicitud de parlamentarios del Congreso Nacional, bajo sus orientaciones y particulares requerimientos. Por consiguiente, sus contenidos están delimitados por los plazos de entrega que se establezcan y por los parámetros de análisis acordados. No es un documento académico y se enmarca en criterios de neutralidad e imparcialidad política.

Introducción

La transición a la democracia en Chile ha sido analizada ampliamente desde la reconstrucción pormenorizada hasta perspectivas interpretativas. De ambas este trabajo se sostiene, buscando entregar tanto los hechos que dan origen a la Concertación, como el marco que permita entender el proceso.

El trabajo parte con el contexto opositor de principios de los ochenta, luego prosigue con el primer referente amplio opositor, la Alianza Democrática, para continuar con el análisis de la coyuntura que modificó estrategias en 1986, la opción político electoral que asumió la oposición y la culminación del proceso de madurez y consenso opositor: la Concertación de Partidos por la Democracia. El trabajo centra su foco en el acontecer político macro, sin entrar en otras esferas como la económica o social, por no ser pertinentes.

1.- El escenario político y las organizaciones opositoras a mediados de los ochenta

En los años que siguieron al golpe de Estado, no se puede hablar de una oposición política al régimen militar debido a distintos factores: fragmentación y desconcierto generalizado dada la violenta represión que sufrió la izquierda, en particular el Partido Socialista, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Partido Comunista, con muchos de sus militantes en el exilio, detenidos y desaparecidos. Por su parte, otros partidos como la Democracia Cristiana y el Partido Nacional –opositores al gobierno de la Unidad Popular– se encontraban en receso obligatorio desde fines de los setenta. Sin embargo, en el caso del PDC, sus dirigentes mantenían contacto y organizaban al partido en la clandestinidad.

La naciente actividad opositora se desarrollaba a nivel intelectual y artístico, amparados en organismos eclesiásticos y universitarios. Las primeras expresiones de descontento ciudadano se llevaron a cabo a fines de la década a través de organizaciones sindicales y estudiantiles. Con el plebiscito de 1980, organizado por el régimen para darle legitimidad institucional a la Constitución de ese año –confeccionada por juristas pro régimen de la llamada Comisión Ortúzar– despertó una oposición política explícita, con cobertura medial dada la importante figura de quien lideró las críticas al evento electoral, a todas luces irregular: el ex Presidente Eduardo Frei Montalva. A partir de entonces, diversas figuras públicas fueron dando forma a una opinión disidente y cuestionadora de la situación de los derechos humanos, de la crítica realidad socioeconómica de gran parte del país, de la evidente intención del régimen de prolongarse y de la estructura jurídico política que el gobierno militar quería fundar: una democracia protegida.

Aun cuando la oposición al régimen se manifestaba a través de personeros individuales y voces políticas particulares –los partidos políticos no existían como referentes ni interlocutores– a nivel social las organizaciones sí se encontraban en movimiento, representando intereses políticos diversos pero actuando coordinadamente, dentro de lo que la represión permitía y pudiendo tener alguna presencia en los medios opositores que se había logrado fundar desde fines de los años 70: las revistas Hoy, Análisis, Apsi, entre otros. El primer referente opositor, fundado por dirigentes particulares de distintos partidos que recogía la necesidad de expresión política y de denuncia de los atropellos superando diferencias ideológicas del pasado, fue el Proyecto de Desarrollo para un Consenso Nacional, PRODEN, a fines de 1982.

Como instancia impulsada por militantes particulares de un amplio espectro de partidos políticos (Democracia Cristiana, Partido Radical, Socialdemocracia, Republicanos ex nacionales, Izquierda Cristiana, Partido Democrático Nacional, entre otros), el PRODEN fue una iniciativa pragmática, no ideológica, que buscaba levantar un discurso opositor al régimen militar con el objetivo de retornar prontamente a la democracia. Si bien en las movilizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, los sectores de centro actuaban aliados con los partidos de izquierda como el Partido Comunista, los socialistas de Clodomiro Almeyda y el MIR, en la dirigencia del PRODEN, quedaban explícitamente fuera los partidarios de la vía violenta.

Entre las iniciativas desarrolladas por el PRODEN –liderado por el demócratacristiano Jorge Lavandero- se cuenta la primera movilización masiva de opositores en la Alameda esquina General Velásquez, así como diversos estudios sobre la realidad socioeconómica e institucional de Chile. A principios de 1983, presentaron ante la Junta de Gobierno un proyecto de reforma constitucional que contemplaba derogar las disposiciones transitorias, concentrar los poderes ejecutivo y legislativo en la Junta durante 2 años para transitar a la democracia mediante una elección de un Congreso unicameral de 120 miembros.¹

Este tipo de iniciativas del PRODEN, además de reuniones de sus dirigentes con el entonces ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa, fueron generando cierta tensión en los dirigentes políticos de la Democracia Cristiana fundamentalmente. En marzo de 1983, fue dado a conocer el primer acuerdo político opositor: el Manifiesto Democrático. Firmado por dirigentes de partidos de centroderecha opositores como Julio Subercaseaux y Hugo Zepeda, socialdemócratas, demócratacristianos, radicales, Mapu, socialistas renovados e izquierda cristiana, el documento –ignorado por los medios de la época- diagnosticaba una profunda crisis moral, social, política y económica que agudizaba las injusticias y las tensiones del país, así como rescataba al sistema democrático inherente a la tradición republicana del país y proponía la realización de una Asamblea Constituyente para dotar al país de una nueva Carta, terminar con los estados de excepción, la plenitud de libertades de expresión y opinión, planes económicos de emergencia para enfrentar la pobreza y el desempleo, entre otras medidas.

Este documento no era un acuerdo de gobierno ni pacto político partidista. Fue un importante paso en busca de la unidad opositora de partidos que antes del derrumbe de la democracia habían sido enemigos irreconciliables y que, producto de la reflexión y el autoanálisis crítico, reconocían sus responsabilidades en el quiebre de la democracia, aunque lo importante en aquel momento era lograr amplios acuerdos generales sin entrar en definiciones que pudieran entorpecer el trabajo conjunto.

Aquel año 1983 fue el momento del giro en la situación política del país, motivada por diversos factores, el principal de los cuales fue el estrecho escenario que tenía el gobierno dada la crisis económica del momento:

“...el régimen militar inició una etapa de crisis de su dimensión transformadora, debido principalmente al fracaso de su modelo económico que se expresó, entre otras cosas, en la quiebra del sistema financiero, en el recambio del equipo encargado de la conducción económica, en una fuerte deuda externa y en un generalizado endeudamiento de vastos

¹ Eugenio Ortega Frei, Historia de una Alianza, CED-CESOC, 1992, p.213

sectores de las capas medias. La expresión más importante de esta crisis en el interior del régimen, que muchos sectores opositores confundieron con una crisis terminal, fue el desencadenamiento de un movimiento de protestas a partir de mayo de 1983. Esto significó un renacimiento del movimiento de masas y obligó al régimen a una incipiente apertura.”²

Este nuevo escenario permitió la participación abierta e incuestionable de los partidos políticos como interlocutores ante cualquier negociación a la transición, en virtud de lo masivas y categóricas que resultaron los llamados a jornadas de protesta nacional desde aquella primera del 11 de mayo. En consecuencia, las instancias transversales como el PRODEN fueron asumiendo un segundo papel, más movilizador y denunciante, unitario en la base y generador logístico de los episodios de movilización.

A esta situación de ocasionales conflictos entre las directrices de los partidos y las organizaciones sociales por los llamados a protesta o por el tono de determinadas movilizaciones o los acuerdos electorales en el mundo sindical y estudiantil – tema permanente hasta el fin del régimen- y que era magnificado por el gobierno que denunciaba un doble discurso opositor: por un lado quienes estaban por la negociación y el diálogo y por otro los llamados a paro y protesta, se agregó una ruptura del eje socialista comunista, al consolidarse el proceso de renovación ideológica de un sector del socialismo. Ello conllevó a que algunos sectores de izquierda que lideraba el Partido Comunista como el socialismo de Almeyda, el MIR y otros grupos menores, que manifestaban una política de enfrentamiento que consideraba “todas las formas de lucha” iniciaron un proceso de convergencia y organización. Por su parte, los sectores que se agrupaban en torno al centro político y la Democracia Cristiana haciendo eco de las reflexiones de la Conferencia Episcopal en su documento “El renacer de Chile”, inauguraron, en agosto de 1983, la Alianza Democrática.

2.- La Alianza Democrática: movilización y desgaste

La oposición política al régimen fue liderada desde entonces por la Alianza Democrática, encabezada por el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Gabriel Valdés. La naciente coalición asumió el Manifiesto Democrático como su marco de acción política. En parte de su intervención en el acto de lanzamiento del referente, Gabriel Valdés sostuvo:

“Nuestra propuesta viene germinando desde hace varios años. Se inició con la aproximación humana de hombres políticos que se habían combatido por años sin dar ni pedir cuartel. Se cultivó en la solidaridad con los detenidos, los perseguidos y los exiliados. Se conquistó en la vida sindical amenazada constantemente por la represión y la cesantía. Se perfeccionó comparando experiencias de países que transitaban hacia la democracia o ya la habían conquistado. Nos alentó la rebeldía de los universitarios y los jóvenes El coraje de las mujeres de los desaparecidos. Nos cambió el orden de nuestra vida los testimonios frente al abuso, el engaño y la crueldad. Obispos, sacerdotes, artistas, dirigentes de sindicatos de las poblaciones y del campo, profesionales, hombres políticos, rostros

² Manuel Antonio Garretón, La oposición política y el sistema partidario en el régimen militar chileno. Un proceso de aprendizaje para la transición. En: El difícil camino hacia la democracia en Chile 1982-1990, Editores Paul W. Drake e Ivan Jaksic, Flacso, 1993, p. 404-405

conocidos o anónimos, fueron los afluentes de este río cuyo cauce se 'ha hecho camino al andar'"³

Los principales acuerdos políticos del conglomerado, que reunía a la derecha republicana, socialdemócratas, radicales, socialistas (sector de Carlos Briones o renovados) y demócratacristianos se sostenían sobre tres ejes fundamentales: Renuncia de Augusto Pinochet; Asamblea Constituyente para reformar la Constitución vigente y Gobierno provisional para una transición de dieciocho meses. Los triunfos electorales de la oposición en organizaciones estudiantiles y laborales junto a la masividad de las movilizaciones y protestas desde mayo de 1983 (siguieron el 14 de junio, 12 de julio, 11 de agosto del mismo año) habían ayudado a crear la sensación de desmoronamiento del régimen, ante lo cual no parecían desproporcionadas las peticiones de la Alianza Democrática, aunque, a la distancia, más bien aparecían como claves discursivas muy precisas para unificar a los grupos políticos y presentar una postura clara frente a la opinión pública, configurando un escenario de negociación, en la perspectiva de una transición pactada.

Dicha estrategia, según M.A. Garretón apuntaba a "...que el proceso de movilizaciones era capaz por sí solo de crear una situación de 'ingobernabilidad' o 'desestabilización en el régimen'. Ello, a su vez, llevaría a que las Fuerzas Armadas se desprendieran en algún momento de Pinochet para negociar con los civiles su retiro del poder. Para otros, se produciría una situación de colapso con un retiro automático de las Fuerzas Armadas donde las fuerzas civiles llenarían el vacío de poder que se creaba."⁴

En estas circunstancias se produjo el episodio de la "apertura política" del gobierno hacia la oposición a través de su ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa. El marco en que dichas iniciativas partieron fue muy complejo para ambos actores: gobierno y oposición. Desconfianzas y descalificaciones, las primeras desde la Alianza y las segundas desde el propio jefe de Estado. Las jornadas de protesta del 11 y 12 de agosto de 1983 fueron enfrentadas por el régimen con 18 mil soldados en la calle, por orden expresa del general Pinochet, y con resultado de decenas de muertes y centenares de heridos y detenidos. En la práctica, la oposición había logrado abrir espacios de acción y legitimidad política, de hecho interlocutaba con el ministro político del régimen acerca de diversas vías de recuperación de la democracia. Los medios de comunicación abrieron sus agendas a los dirigentes de la Alianza, y el régimen en un intento por "civilizar" su perfil, permitió la entrada al país de connotados dirigentes políticos opositores: Andrés Zaldívar, Carlos Briones, Jaime Castillo, Luis Maira, entre otros.

A pesar de las reuniones realizadas en agosto y septiembre al amparo del Arzobispo de Santiago, Monseñor Juan Francisco Fresno -ofreciendo un ambiente neutral para el desarrollo de la "apertura"- con intercambio de documentos que en el caso de la oposición conllevaban medidas inmediatas como el fin del exilio, de los estados de excepción, libertad de prensa, esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos en las jornadas de protesta, mientras el ministro Jarpa configuraba las etapas necesarias para el envío de las leyes de partidos políticos, del Tribunal de Elecciones, entre otras, el "diálogo" no parecía pasar de las buenas intenciones personales del ministro. Permanentemente el general Pinochet se encargaba de minimizar dichos encuentros restándole todo piso político a las gestiones de su ministro:

³ Eugenio Ortega, op cit. P.232-233

⁴ Manuel Antonio Garretón, op. cit., pp 407-408.

“En rigor, nunca en Pinochet –aunque sí en Jarpa- existió voluntad de diálogo. Años después, Pinochet se referiría a esa iniciativa describiéndola como ‘un hábil juego de piernas’. Roto el diálogo y recuperado del momento de debilidad que lo había conducido a la apertura de negociaciones, Pinochet volvió a la intransigencia, expresada, además, en un lenguaje rudo y agresivo: ‘el camino de la Constitución no se va a variar. Va a seguir, aunque le parezca mal a un grupo de señores (lo que era una alusión a la Democracia Cristiana) que dicen pertenecer a un ex partido político...’”⁵

Los llamados a movilizaciones no se suspendieron. Mientras, la Alianza elaboraba documentos alternativos con propuestas de reformas constitucionales que permitieran elecciones libres con un gabinete de unidad nacional. Sin embargo, la contraparte no daba señales de interés por fijar agendas ni fechas. Recuérdese que una frase emblemática del gobierno militar era que tenía “metas, pero no plazos”, distintos a los que la Constitución de 1980 disponía, y que para el caso de la Presidencia de la República, implicaba un plebiscito que, en el caso de serle favorable, podía prolongar al general en el cargo hasta 1997. Para el gobierno, las reuniones con la oposición durante agosto y septiembre de 1983 tenían un mero carácter informativo. Para los dirigentes de la Alianza la inflexibilidad del gobierno demostraba sólo una intención dilatoria, destinada a ganar tiempo y mostrar ante la opinión pública una actitud de apertura, tras la cual no existía ninguna voluntad política real de negociar. Uno de los argumentos reiterados por las autoridades de gobierno era el de las alianzas con el Partido Comunista y con la izquierda en general, mientras que para los opositores aquello no constituía un “tema”, sino una excusa para no avanzar en el restablecimiento pronto de la democracia. El diálogo y la apertura no continuaron.

Un efecto no calculado de aquellos dos meses fue la legitimación en la práctica de los partidos políticos opositores, sus referentes –la Alianza Democrática, el Proden- y sus dirigentes. Así mismo, la derecha partidaria del régimen también fue motivada, desde el propio gobierno, para organizarse, como el caso de Avanzada Nacional.

Por su parte, la izquierda también aprovechó el espacio ganado constituyendo a fines de 1983 el Movimiento Democrático Popular (MDP) que reunía al Partido Comunista, el Partido Socialista, sector Almeyda y el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).

Como demostración de convocatoria, en noviembre, la oposición convocó a la mayor concentración pública en 10 años de régimen militar en el Parque O’Higgins: más de 250 mil manifestantes acudieron a expresarse con pancartas de los partidos de la Alianza y del MDP. Unidad en la movilización, pero fractura en las estructuras dirigentes, fundamentalmente por la divergencia en los modos de llegar a la democracia y terminar con el gobierno militar. En los años siguientes, el fracaso del diálogo político alimentó las posturas más confrontacionales de la oposición, especialmente del Partido Comunista y su brazo armado, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

El fracaso del diálogo y el desgaste de las jornadas de protesta generaron un cierto desconcierto en los dirigentes de la Alianza Democrática. Los socialistas manifestaron críticas a la conducción del movimiento, planteando la necesidad de ampliar el espectro

⁵ Genaro Arriagada, Por la razón o la fuerza. Chile bajo Pinochet. Ed. Sudamericana, 1998, p.173

del conglomerado –léase incorporación del Partido Comunista- y generar asambleas comunales, entre otras propuestas. La Democracia Cristiana coincidía en el diagnóstico de desgaste de las movilizaciones, aunque mantuvo la voluntad de continuar convocándolas como una manera de avanzar en la resistencia pacífica al régimen. El problema era la política de rebelión de masas propiciada por el Partido Comunista la cual no coincidía con la estrategia de la Alianza. Al respecto sostenía el PDC:

“...el Partido Comunista se encontraba fuera de la Alianza Democrática por el simple hecho de que ‘no participa de los principios fundamentales que son base de nuestro proyecto para Chile en el futuro’ (...) la presencia del Partido Comunista en la alianza ‘sólo provocaría dentro de ella y ante la opinión pública, confusiones, desacuerdos y malos entendidos’”⁶

Durante 1984, los llamados a huelgas y paros no tuvieron el resultado esperado de convocatoria, fundamentalmente por el temor de la ciudadanía ante la represión militar y las medidas de toque de queda imperantes desde tempranas horas. No era lo mismo una ciudad parada por las manifestaciones y la desobediencia civil, que una ciudad que a mediodía bajaba su actividad y los ciudadanos se apresuraban a llegar cuanto antes a sus hogares, mientras los enfrentamientos se desataban en poblaciones periféricas.

Al respecto, Genaro Arriagada sostiene:

“La huelga de los trabajadores es más posible cuando se está más cerca del pleno empleo y, por el contrario, más difícil cuando las tasas de cesantía son mayores. Para ‘disciplinar’ al mundo obrero el régimen había tenido en sus manos algo más eficaz que varias policías políticas; esto es, una muy alta tasa de cesantía y centenares de miles de subempleados que deseaban un lugar de trabajo estable y bien remunerado. Estos cesantes eran el ‘ejército de reserva’ de que el gobierno disponía como amenaza frente a todo aquel que quisiera ir a la huelga.”⁷

Sin embargo, las tensiones desatadas durante aquel año, los espacios públicos ganados, la legitimidad acumulada fue un capital que la oposición debería administrar en los siguientes años, período que se vería cada vez más determinado por los hitos institucionales que el propio régimen tenía previstos –leyes políticas, plebiscito de 1988- y que determinarían la estrategia final de la oposición: ganarle al régimen en su propio terreno.

Resulta interesante notar que ya a fines del intenso año 1983, la Alianza Democrática se propuso aunar esfuerzos y voluntad política por proyectarse como un conglomerado político sólido para gobernar el país post dictadura militar. Gabriel Valdés sostuvo por entonces la necesidad de una “acción conjunta ahora, una acción de coalición durante la transición, actuar conjuntamente durante el período constituyente y por lo menos un primer Gobierno de coalición de las fuerzas democráticas.”⁸

⁶ Eugenio Ortega, op cit, p. 256

⁷ Genaro Arriagada, op cit, p. 175

⁸ Eugenio Ortega, op cit, p.256

Durante 1984, la Alianza Democrática continuó llamando a movilizaciones en conjunto con organizaciones sindicales como el Comando Nacional de Trabajadores, sin embargo, la convocatoria era menor y una sensación de inercia se apoderó del conglomerado. Las estructuras internas del referente eran poco flexibles, la presidencia rotativa descontinuaba el discurso y la imagen pública, mientras en organizaciones estudiantiles y laborales la unidad con los partidos de izquierda era una realidad electoral insoslayable. El régimen no mostraba fisuras, y el campo se presentaba propicio para experimentos paramilitares de algunos grupos como el MIR (que ya había actuado a mediados de 1983 al asesinar al Intendente de Santiago Carol Urzúa) y el ya mencionado FPMR que tendría una escalada de actividades subversivas que se prolongaría más allá del fin de la dictadura militar.

Mientras, para la oposición política, el debate se orientaba a la legitimidad de la institucionalidad militar, la Constitución especialmente, y la apertura hacia sectores de centro derecha comprometidos con los valores de la democracia y su pronta instauración. Esta situación de intransigencia del régimen, llevó a que a fines de 1984 se decretara estado de sitio nuevamente, ante lo cual el ministro Jarpa renunció al cargo, algunos meses después.

En este escenario, los extremos comenzaron a retroalimentarse. El régimen mantuvo el estado de sitio hasta mediados de 1985, censurando la prensa, deteniendo opositores y asesinandolos brutalmente -como los profesionales comunistas degollados- reprimiendo violentamente durante las jornadas de protesta, especialmente en las poblaciones -las llamadas operaciones "rastrillo"- mientras las "Milicias Rodriguistas", organizaciones destinadas a captar jóvenes del PC y entrenarlos en actividades de subversión urbana, previo paso al FPMR, generaban acciones de violencia menores y agitación callejera.

La dirigencia del PDC, principal partido de la Alianza se expresaba en los siguientes términos ante este escenario:

"...hemos sostenido que la vía de la violencia es, en las condiciones de militarización del país, un verdadero crimen contra el pueblo... el pueblo sufre represión y terribles restricciones materiales y, además, debe perder en cada 'enfrentamiento' la modesta vivienda, la caseta telefónica, el almacén de la esquina, el centro comunitario o los propios medios de transporte, pagando así un doble costo en la guerra idiota y criminal... la gran masa se retrae porque entre una violencia existente conocida y otra por venir desconocida prefiere simplemente alejarse de la acción. Siendo así tales actos violentos, lejos de debilitar la dictadura, contribuyen a perpetuarla."⁹

Ante esta realidad, y nuevamente a iniciativa personal del ahora Cardenal Juan Francisco Fresno, un grupo de personalidades¹⁰ ligadas a la Iglesia pero no dirigentes de partidos, empezó a explorar distintas sensibilidades políticas de un amplio espectro con el fin de acordar las bases de una pacificación y democratización del país. Así, en agosto de 1985 se dio a conocer el "Acuerdo Nacional para una transición a la democracia plena", instancia colectiva que no reemplazó a la Alianza Democrática, sino que se constituyó como un marco general de convivencia jurídico-política para avanzar en la democratización. No era

⁹ Genaro Arriagada, op cit, p. 182

¹⁰ Entre ellos los empresarios José Zabala, Fernando Léniz y el ex ministro de Eduardo Frei Montalva, Sergio Molina.

un documento de oposición al gobierno –de hecho incorporaba a personeros de la derecha, como Francisco Bulnes y Andrés Allamand- sino una manifestación de voluntad por transitar a la democracia, bajo la propuesta de ciertas reformas constitucionales que permitieran una elección libre y competitiva, fin del exilio, leyes políticas, etc. El documento fue rechazado por el gobierno, ciertamente -de hecho ni siquiera recibió a sus coordinadores-, por Jaime Guzmán, líder de la UDI quien lo consideró poco serio, vago y de desarrollo imprevisible y por la izquierda del MDP pues, a su juicio, el documento no consideraba una salida inmediata del gobierno militar del poder como condición para transitar a la plena democracia.

Reflexiona al respecto Edgardo Boeninger:

“El Acuerdo Nacional fue el primer paso en el tránsito de la confrontación al consenso que marcó el proceso político chileno, un episodio precursor de la transición chilena a la democracia (...) La lección de esta experiencia es que mientras las Fuerzas Armadas mantuvieran su solidez y cohesión internas y en tanto no se produjera una avasalladora presión social, la transición sólo podía darse en el marco del esquema oficial. Estas reflexiones fueron surgiendo en los círculos opositores en el curso del año 1986.”¹¹

3.- Los porfiados hechos y el cambio de escenario y estrategia opositora

Durante aquel año 1986 –llamado “el año decisivo”- se produjo una importante instancia de movilización y convergencia entre el mundo de las dirigencias políticas y el mundo de las organizaciones sociales: la Asamblea de la Civilidad, creada a fines del mes de marzo bajo el liderazgo de dirigentes de los colegios profesionales, especialmente el médico demócratacristiano Juan Luis González. Esta entidad multigremial representaba las exigencias sociales y económicas de diversos sectores, sindicales y también profesionales, a través del documento “La Demanda de Chile”, con el firme apoyo de la Alianza Democrática, y, además, con el respaldo y presencia de los partidos del MDP, los cuales, así, lograban insertarse en la movilización unitaria desde una perspectiva social y gremial, no política. La Asamblea de la Civilidad constituyó un referente amplio, encabezado por líderes de organizaciones sociales y gremiales, que generó una sensación de compromiso sólido y unitario de la oposición, cuestión no concretada a nivel político, dadas las insalvables diferencias estratégicas sobre fines y medios. Era un nuevo impulso en la convocatoria a movilizaciones de protesta, como la de los días 2 y 3 de julio de aquel año, que fueron violentamente reprimidas por el Ejército (episodio de los dos jóvenes quemados por una patrulla militar) y con amplios requerimientos judiciales y detenciones de los dirigentes de la Asamblea.

Durante aquellos meses, sin embargo, dos hechos políticos de enorme magnitud, terminaron por rebloquear cualquier iniciativa –la Asamblea, por cierto- de unidad opositora, en la base y, especialmente, en la dirigencia: la internación de armas en la localidad costera de Carrizal Bajo (al norte del puerto de Huasco, Tercera Región) desbaratada por los servicios de inteligencia del régimen (alertado por el Departamento de Estado norteamericano) en agosto, y el atentado frustrado al general Pinochet en septiembre, en que murieron 5 guardaespaldas, reivindicados ambos por el FPMR.

¹¹ Edgardo Boeninger K., Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad, Ed. Andrés Bello, 1997, p.309-312

Estos hechos determinaron un alejamiento categórico entre la Alianza Democrática y el Partido Comunista –y su referente el MDP-. El escenario político del país se modificó. El régimen cerró filas y los opositores tuvieron que experimentar una cruda represión con claras connotaciones de venganza que partió la madrugada siguiente al atentado en que – durante toque de queda- varios opositores fueron sacados de sus casas y asesinados por la CNI, como el periodista de revista Análisis, José Carrasco Tapia.

Para los actores políticos, la nueva fase implicó dar por cerradas las instancias eventuales de diálogo y abocarse a consolidar posiciones. De acuerdo a M. A. Garretón:

“Desde el punto de vista del régimen (el nuevo escenario) se caracterizó por la implementación de la institucionalidad que aseguraba el cumplimiento del itinerario previsto en la Constitución, es decir, el plebiscito. Esto incluía una cierta recuperación económica, especialmente en lo que se refiere al problema del endeudamiento externo, y la promulgación de las leyes políticas, complementarias a la Constitución (ley de partidos, de registros electorales, votaciones y escrutinios, etc.), además de las operaciones necesarias para asegurar la candidatura de Pinochet y su triunfo en el Plebiscito.”¹²

Por su parte, para la oposición “...este período marcó el paso progresivo y desigual por parte de sus componentes hacia la comprensión del carácter de las transiciones de este tipo de régimen militar a un régimen democrático. La experiencia del ciclo de movilizaciones y la rearticulación del régimen después de los arsenales y el atentado a Pinochet, así como el aprendizaje de otras experiencias de transición en el Cono Sur, en Europa y en Asia, fueron poco a poco homogeneizando la perspectiva que no habría término del régimen por colapso o derrocamiento, sino a través de un proceso político. Pero también que, dado el tiempo perdido y la incapacidad de la oposición de haber mostrado un escenario político, una fórmula de término del régimen, ese proceso político inevitablemente se acercaría a las formas institucionales previstas por el régimen para perpetuarse.”¹³

Durante aquellas mismas semanas, los partidos firmantes del “Acuerdo Nacional” intentaron reposicionar la iniciativa, suscribiendo un nuevo documento: “Bases de sustentación del régimen democrático. Profundización del Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia”, en que los firmantes¹⁴ hacían una valorización de la democracia, la soberanía popular, los derechos humanos, la solidaridad y la justicia social, la libertad de expresión y la participación como ejes de convivencia, así como los derechos sociales a vivir dignamente y asegurar vivienda, salud y educación a los postergados. Esta iniciativa, que no tuvo mayor repercusión en el gobierno, sirvió al interior del conglomerado opositor para diagnosticar una voluntad de concertación política capaz de sostener un gobierno de transición y entendimiento con la Fuerzas Armadas, más allá del plebiscito.

La Alianza Democrática, sin embargo, también experimentó una crisis, al retirarse de ella el Partido Socialista de Ricardo Núñez, en diciembre de 1986, optando por orientar su

¹² Manuel Antonio Garretón, op cit, p.417

¹³ Ibid, p. 418

¹⁴ Partido Demócrata Cristiano, Liberal, Nacional, Radical, Republicano, Socialdemócrata, Socialista sector Núñez, Socialista histórico, Socialista sector Mandujano, Unión Socialista Popular, Democrático Nacional, Humanista y Mapu.

entendimiento estratégico con el resto de la izquierda que se reunía en torno al Partido Comunista

4.- Oposición dentro de las reglas: el camino político electoral

Asumiendo el contexto institucional –la polémica en torno a la legitimidad de la Constitución fue obviada- la oposición intentaría modificar el ejercicio electoral del plebiscito por la fórmula de las “elecciones libres”

La discusión interna de los partidos fue intensa, especialmente en el Partido Demócratacristiano, eje de la Alianza Democrática, en el cual circularon tesis acerca de la necesidad de aglutinar la oposición en torno a un candidato que personificara la exigencia por un retorno a la democracia y reducir la imagen de dispersión y heterogeneidad, cuestión que se resolvería sola más adelante al mediar elecciones internas en el PDC y quedar Patricio Aylwin en una situación de “primus inter pares”, con la mejor opción para encabezar la Alianza. A estas alturas, fines de 1986 y comienzos de 1987, el PDC consideraba fundamental diseñar las líneas estratégicas generales para un gobierno encabezado por los partidos de la Alianza Democrática que diera garantías de estabilidad y orden a todos los sectores. En esta estrategia de consolidar una “hoja de ruta” de la oposición frente a los desafíos electorales, exigiendo comicios libres y abiertos, aunaron posiciones el PDC y el PS-Núñez. Así, el Comité por las Elecciones Libres (CEL), coordinado por Sergio Molina –el mismo del Acuerdo Nacional- se presentó ante la opinión pública en marzo de 1987. La fórmula escogida fue una campaña encabezada por personalidades de distintas esferas (Igor Saavedra, Nemesio Antúnez, Oscar Godoy, Jorge Edwards, entre otros) que recorrerían el país, abogando por una reforma constitucional que sustituyera el plebiscito como mecanismo de sucesión presidencial por un acto electoral abierto y competitivo.

Uno de los escollos a salvar durante el año 1987 fue el de la inscripción legal de los partidos de la oposición. En el PDC no había una sola opinión al respecto. Por su parte, el Partido Humanista y el Socialdemócrata habían iniciado los trámites respectivos. En las elecciones internas del PDC–agosto de 1987- triunfó Patricio Aylwin, partidario de la inscripción y de la movilización cívica por la vía de la inscripción de los ciudadanos en los registros electorales. Señalaba el PDC entonces en su voto político:

“La movilización masiva del pueblo con este objeto hará inminente la derrota del régimen, si persiste en su plebiscito, y abrirá el camino a las reformas necesarias para posibilitar las elecciones libres que la razón aconseja y que el pueblo exigirá.”¹⁵

Se señalaba, además, la voluntad política por sostener un gobierno de coalición amplio, origen de la posterior Concertación:

“(Se debe) redoblar el empeño para concertar a todas las fuerzas democráticas, desde la derecha democrática hasta la izquierda democrática, incluyendo a los independientes, en torno a una alternativa de gobierno nacional y popular, con una propuesta programática común que contemple los cambios institucionales necesarios para instaurar un régimen plenamente democrático y que responda, a su vez, con seriedad y profundo sentido de

¹⁵ Eugenio Ortega, op cit, p. 343

justicia, a las necesidades nacionales y a los principales problemas económicos y sociales que sufre el pueblo chileno.”¹⁶

Con estas decisiones, el PDC y los demás partidos entraban de lleno a competir en la arena institucional diseñada por el régimen militar, legitimando el itinerario constitucional, pero con la distancia necesaria para fiscalizar cualquier intento de fraude, como el que intentó realizar Ferdinand Marcos en las elecciones de Filipinas, episodio que alertó a la oposición chilena, especialmente en lo referente a los registros electorales y los escrutinios.

Por su parte, los sectores de izquierda, incluido el PS-Núñez, realizaron desde fines de 1986 una serie de “Cónclaves” destinados a fijar posiciones luego de la incertidumbre y cuestionamiento que significó para este sector el episodio de los arsenales y luego el fallido atentado a Pinochet. Al percibir poca sintonía de algunos de estos partidos –el Partido Comunista fundamentalmente- frente al rechazo categórico a cualquier intento de militarizar la oposición y la política e impulsar la movilización electoral, el PS- Núñez comenzó a tomar distancia. La izquierda no lograba resolver en el interior de sus partidos –en que el socialismo aparecía notoriamente fragmentado permitiendo la hegemonía del Partido Comunista en el MDP-, una posición respecto a la campaña de elecciones libres, la inscripción de los partidos y de los ciudadanos en los registros electorales.

Algunos partidos como la Izquierda Cristiana, optaron por el pragmatismo y la lucha electoral. Paulatinamente, el PS-Núñez y el PS-Almeyda también coincidieron en privilegiar esta estrategia, quedando el Partido Comunista en una situación de aislamiento y automarginación. En consecuencia, a mediados de 1987 surgió la Izquierda Unida, referente que vino a reemplazar en la práctica al MDP, incluyéndolo e incorporando al Mapu, la Izquierda Cristiana y el Partido Radical.

El desafío opositor durante aquél año, resultaba doble: por una parte, lograr motivar a los ciudadanos y, especialmente los jóvenes, a inscribirse en los registros electorales y perder el miedo y la incertidumbre. Este desafío resultaba dificultado por el régimen, al cual le convenía un universo electoral reducido donde sería más fácil manejar su voto duro e incondicional, mientras la oposición política trabajaba por inscribir al máximo posible de electores. Por otro lado, el Partido Comunista condenaba enérgicamente este proceso, considerándolo inconsecuente y casi cómplice con la dictadura militar. A fines de 1987, presionado por el resto de la izquierda, el PC aceptó apoyar la inscripción en los registros electorales.

La estrategia de movilizarse por las elecciones libres, creando referentes amplios como el Comité de Partidos Políticos para las Elecciones Libres (COPPEL, dirigido por Andrés Zaldívar), surgido de la Alianza Democrática y el Comité de Izquierda por las Elecciones Libres (CIEL, encabezado por Ricardo Lagos), además del ya mencionado Comité de personalidades, generaron una masiva difusión cívica de los fundamentos de la democracia, sus instituciones y del valor del ciudadano como responsable de sus derechos políticos y constructor de su realidad social y colectiva. Fue una suerte de “escuela cívica” (los simulacros de votaciones, por ejemplo) que, sin duda, permitió ir consolidando la confianza ciudadana de que era posible cambiar el régimen militar en forma pacífica derrotándolo en la arena política.

¹⁶ Ibid, p. 344

Un elemento aún perturbaba dichas movilizaciones cívicas: la inscripción de los partidos (fundamental para contar con apoderados en las mesas de votaciones que fiscalizaran cualquier eventual fraude, además del derecho a propaganda televisiva). Aquí no hubo consenso. El PDC se inscribió, así como el Partido Radical y el Humanista, mientras el PS-Núñez llamó a inscribir un partido único de oposición, que reunió a personeros de distintos sectores de izquierda, e incluso de derecha democrática: el Partido por la Democracia (octubre de 1987), al estilo del Movimiento Democrático Brasileño, iniciativa que tuvo alguna acogida en dirigentes demócratacristianos como Gabriel Valdés, pero no en la mesa del partido encabezada por Patricio Aylwin.

A medida que avanzaban los meses, a fines del año, la oposición llegó a la convicción que no habría reforma constitucional y que debía enfrentar el más polarizado y confrontacional escenario: el plebiscito del SI y el NO.

5.- La Concertación como culminación de un largo proceso de reflexión y aprendizaje: triunfo en el Plebiscito y en las elecciones

El verano de 1988 mantuvo a las dirigencias de los partidos de la oposición en intensas reuniones buscando acuerdos estratégicos que permitieran dar forma a un bloque sólido de partidos que trabajara por la opción NO en el plebiscito de aquel año. Algunos aspectos entrababan los acuerdos, como la propuesta emanada desde algunos dirigentes en cuanto la conveniencia de contar con un programa común, un sólo partido inscrito y un candidato que liderara el proceso. Sin embargo, la realidad del momento y la urgencia por consolidar cuestiones básicas como la inscripción ciudadana y la fiscalización de todas las etapas, copaban la agenda política de los partidos. Aquellos requerimientos habrían agregado un elemento muy distorsionador e innecesariamente desgastante. No se estaba en una competencia electoral, se estaba en un desafío distinto: transformar la movilización social –capital opositor- en movilización político-electoral para derrotar el régimen. Por el momento no se requería programa detallado –sólo un marco general que garantizara confianza en el electorado- ni candidato. Ese sería un desafío posterior.

De esta manera se llegó a establecer un mínimo común denominador: un conglomerado opositor unido tras el NO: la Concertación de Partidos por el NO, dada a conocer a la opinión pública el 2 de febrero de 1988 y que reunía al Partido Demócrata Cristiano, Partido Socialista de Almeyda, Movimiento de Acción Popular Unitaria Obrero Campesino, Movimiento de Acción Popular Unitario, Partido Radical de Luis Fernando Luengo, Partido Radical de Enrique Silva Cimma, Izquierda Cristiana, Socialdemocracia, Partido Socialista de Núñez, Partido Democrático Nacional, Partido Humanista, Unión Socialista Popular y Unión Liberal Republicana. En las siguientes semanas se incorporaron el Partido Socialista sector de Manuel Mandujano y el Partido Socialista Histórico, conformando el pacto opositor al gobierno militar más amplio a la fecha. Sólo el PC y el MIR se restaron.

Un desafío no menor fue dotar de contenido a la opción NO. Si bien la motivación de impedir que el general Pinochet –nominado oficialmente en agosto de 1988- se prolongara en el poder era potente y aglutinadora, resultaba necesario explicitar una serie de cambios y transformaciones que la opción NO conllevaba. Señala el documento fundacional:

“...a pesar de las reiteradas propuestas y demandas emanadas de los más diversos y mayoritarios sectores de la vida nacional para que se realicen elecciones libres, el actual gobierno ha persistido empecinadamente en su decisión de convocar a plebiscito.

“Ante esta continuada negativa oficial, llamamos a los chilenos a votar NO y así derrotar a Pinochet y al régimen en el plebiscito (...) Estamos convencidos de que tendremos la capacidad suficiente para contrarrestar la abrumadora publicidad y la desembozada presión oficial. Asimismo, estableceremos un sistema de fiscalización y control democrático del proceso plebiscitario incluyendo votaciones y escrutinios...

“Con el objeto de lograr la mayor eficacia en la campaña por el NO, los partidos que suscriben esta declaración establecerán las concertaciones necesarias, respetando tanto las identidades de cada cual, como sus respectivas políticas de alianzas, asegurando así la plena participación en las tareas de la campaña de las fuerzas políticas y a las organizaciones sociales comprometidas en este propósito.”

Entre las propuestas formuladas –el marco general garantizador- la naciente Concertación proponía:

“Realización al más breve plazo posible de elecciones libres de Presidente de la República, con mecanismo de segunda vuelta y por un período de cuatro años, así como de un Congreso Nacional con facultades constituyentes, íntegramente elegido por sufragio popular.

“Respaldar los consensos alcanzados en materia de derechos humanos, asegurar la justicia y plena vigencia de los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“Derogación de toda norma que establezca la proscripción ideológica o que impida el ejercicio pleno de la soberanía popular (...) Término del exilio y restitución de la nacionalidad a quienes hayan sido privados de ella...”¹⁷

La oposición reunida en la Concertación logró recoger los dos elementos –según Manuel Antonio Garretón- que la opinión pública mayoritariamente expresaba en las encuestas: los deseos de cambio político, realizado en orden y paz. Ello permitía otorgarle al plebiscito un significado de rechazo a la persona de Pinochet y a su marco institucional, para reemplazarlo por otro que, sin producir vacíos de poder, se imponía dentro de las reglas del juego.

Otro elemento importante que la Concertación entendió desde un primer momento fue la conducción y organización unificada. Añade Garretón:

“Toda la historia anterior conspiraba para ello. Había problemas extremadamente complejos que resolver, como la desigualdad de peso político entre los partidos concertados, la distinción entre partidos legales y partidos de hecho que no tenían acceso

¹⁷ Declaración constitutiva de la Concertación de Partidos por el NO Revista APSI Nº 238, 8-14 de febrero 1988, p. 5

a prerrogativas legales, la relación de los partidos de la Concertación con el Partido Comunista, las disputas por los liderazgos de la campaña que tendría indudables proyecciones para el futuro, la relación con las organizaciones sociales que se plegaban a la campaña por el NO. Todo ello podía hacer estallar la coalición.”¹⁸

Sin embargo, este punto, la unidad en la diversidad, que era precisamente un flanco de ataque permanente del gobierno en su campaña por el SI en contra de la Concertación, resultaba el aspecto más valorado por la opinión pública en las encuestas. Los líderes de la Concertación estaban conscientes de dicha responsabilidad y pragmáticamente manejaron una cierta ambigüedad en áreas sensibles, sin llevarlas a discusiones ideológicas, sino que resolviéndolas en instancias puntuales.

La estrecha vinculación entre las distintas orgánicas que se estructuraron en los más diversos ámbitos y esferas de la actividad nacional –estudiantes, trabajadores, mujeres, colegios profesionales, entre otros- permitió repolitizar a la ciudadanía para vencer el miedo y la resistencia de quienes veían con escepticismo la posibilidad de vencer al gobierno militar en las urnas.

La campaña del NO, resultó ser de una gran calidad, de amplitud y pluralismo, enfatizando la llegada de un nuevo tiempo, en paz, sin miedo y con esperanza, optimismo, seguridad y tranquilidad. Por su parte, la campaña gubernamental del SI se basó en la confrontación descalificatoria, apelando a los traumas del pasado y la incertidumbre del desorden, así como en sembrar miedo y temor en la población en caso de ganar el NO.

El 5 de octubre de 1988 la ciudadanía se manifestó mayoritariamente por la opción NO alcanzando un 54.7% de las preferencias.

Un elemento fundamental en el éxito electoral de la Concertación fue el proceso de convergencia entre partidos que alguna vez fueron declarados antagonistas, como la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, sobre la base del respeto por los perfiles y las identidades pero comprometiéndose con la democracia y aterrizando los temas a la realidad concreta de la coyuntura: la necesidad de administrar con responsabilidad la oposición para terminar con el régimen militar por la vía electoral. Por otra parte, resultó fundamental en este acercamiento estratégico el proceso de renovación socialista hacia el centro político, superando el ideologismo maximalista y reconociendo la democracia y sus instituciones como la mejor manera de convivir en sociedad, y, por último, está la postura del socialismo almeydista que terminó por romper el histórico eje PC-PS, aproximándose al socialismo renovado (PS-Núñez), quedando el Partido Comunista autoaislado del acontecer político como un actor secundario de la democracia.

El período entre el triunfo en el plebiscito y las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre de 1989, tuvo para la Concertación como desafío mayor mantener dicha unidad lograda –ahora con la responsabilidad de consensuar candidato, coalición, pacto parlamentario y programa-, además de negociar un conjunto de reformas constitucionales con el gobierno militar.

¹⁸ Manuel Antonio Garretón, op cit, p. 422-423

El primer paso fue la transformación cualitativa –inmediatamente después de ganado el plebiscito- de la Concertación en coalición política: la Concertación de Partidos por la Democracia, alianza que alcanzaría el gobierno con que el país inauguraría la nueva etapa democrática.

Una etapa posterior fue la elección del candidato, tema que no fue menor, pero que luego de ejercitarse los mecanismos democráticos al interior de la Concertación, se resolvió. La DC consideraba tener la mejor opción para designar candidato y en esto tuvo apoyo de algunos sectores socialistas. Si bien al interior del partido había importantes e indiscutibles candidatos –Gabriel Valdés, Andrés Zaldívar, Sergio Molina, Eduardo Frei Ruiz-Tagle- finalmente, fue la figura de Patricio Aylwin la que terminó imponiéndose dentro del partido y de la coalición, dado el sólido liderazgo personal ejercido como vocero durante la campaña del NO.

Respecto a los partidos que conformaron esta Concertación II fueron los mismos de la jornada anterior, con la salvedad que con posterioridad al triunfo electoral de diciembre de 1989, los fragmentados sectores socialistas, más el MAPU, se reunificaron en un sólo Partido Socialista de Chile, disolviéndose en consecuencia la Izquierda Unida en que aún participaban, nominalmente al menos, los socialistas almeydistas junto al PC y el MIR. Esto permitió mostrar una imagen mayor de solidez, unidad y responsabilidad política ante la opinión pública.

Sin embargo, en el campo de las elecciones parlamentarias hubo complicadas negociaciones. Subpactos, omisiones de algunos partidos en algunas circunscripciones a favor de partidos chicos –todo ello en virtud del sistema electoral binominal- y, a la vez, la Concertación compitiendo con candidatos del pacto de la izquierda (socialistas, izquierda cristiana, comunistas) denominado PAIS –Partido Amplio de Izquierda Socialista-. Un engorroso trabajo de “ingeniería electoral” que finalmente permitió a la Concertación ganar en la Cámara y el Senado, aunque en esta última el triunfo en las urnas no se veía reflejado en la correlación de fuerzas dados los senadores institucionales, uno de los “enclaves” autoritarios heredados.

El programa con que la Concertación se presentó a las elecciones de 1989 se venía trabajando por equipos de especialistas desde hacía muchos meses. En lo económico social, el programa debía compatibilizar las legítimas aspiraciones de los sectores de izquierda, con la moderación necesaria para evitar desconfianzas en los sectores sociales de la clase media. Las líneas generales del programa sostenían un manifiesto compromiso con el bienestar duradero para los sectores postergados, sostenido y asegurado por un creciente proceso de crecimiento. La igualdad de oportunidades y de acceso a los beneficios fueron considerados como requisitos de la estabilidad democrática.

Por su parte, el derecho de propiedad quedaba absolutamente garantizado, así como la libertad de emprender inversiones, mientras, el Estado debía asumir un rol activo en desarrollar aquellas áreas del desarrollo en que el mundo privado –totalmente legitimado como agente productivo fundamental- no participaba (el llamado rol subsidiario del Estado). En materia laboral, la Concertación asumió un compromiso con el derecho de los trabajadores a mejorar su situación y a organizarse y demandar sus derechos, disminuidos ostensiblemente durante la década de los ochenta. Las reformas serían objeto de discusión entre trabajadores, empresarios y gobierno.

La economía de mercado y el rol de la empresa privada fueron asegurados explícitamente en el programa. Ese fue el escenario que asumió la Concertación. Las políticas concretas serían materia de análisis y discusión por las vías correspondientes (el nuevo parlamento), una vez que el gobierno asumiese en propiedad el control del aparato administrativo del Estado.

En lo político institucional, el plebiscito de las 54 reformas a la Constitución aprobadas el 30 de julio de aquel año, había permitido modificar la Carta de disposiciones autoritarias y antidemocráticas –como el artículo 8º que proscribía a los partidos marxistas o el rango constitucional que adquirieron los tratados internacionales en materia de derechos humanos-, aunque las materias más importantes que constituían una fuerte injerencia de las Fuerzas Armadas en las decisiones políticas –duración en sus cargos de los comandantes en jefe de las FF.AA., el rol del Consejo de Seguridad Nacional, el sistema electoral, los senadores designados- quedaron como temas pendientes –los llamados enclaves autoritarios-. Señala Boeninger al respecto:

“El factor crucial en la aprobación unánime por la Concertación del paquete plebiscitado fue la convicción de que lo fundamental era asegurar la transferencia del gobierno, aunque no se lograra la simultánea y equivalente transferencia del poder.”¹⁹

Ello debería ocurrir como parte de la dinámica propia del ejercicio del gobierno y de los mecanismos de la democracia. El 11 de marzo de 1990, tras haber derrotado, en diciembre de 1989, al candidato de la derecha, el ex ministro de Hacienda Hernán Büchi y al candidato independiente Francisco Javier Errázuriz, la Concertación de Partidos por la Democracia asumió como coalición gobernante encabezada por el Presidente Patricio Aylwin.

Comentarios finales

Este trabajo ha pretendido dar cuenta de los orígenes de la Concertación de Partidos por la Democracia, desde las primeras manifestaciones opositoras al régimen militar en 1983, hasta la llegada de la democracia a cargo del primer gobierno de la coalición, en 1990.

Todos los autores consultados coinciden en señalar que se trató de una convergencia difícil, en primer lugar por las circunstancias en las cuales se tuvo que desarrollar: plena dictadura militar, con persecución y descalificaciones permanentes, cuando no exilio, cárcel o muerte.

En segundo lugar, atentaba contra cualquier intento de unidad la heterogeneidad de sus miembros. Se trataba de partidos políticos que antes del golpe de Estado de 1973 se encontraban en una dinámica confrontacional insalvable que terminó no pudiendo dar solución a la crisis de principios de los setenta. Y no sólo se trataba de las formas de hacer política sino de los proyectos globales y excluyentes que impulsaban, especialmente en el caso del Partido Demócrata Cristiano y del Partido Socialista. Los esfuerzos de ambas colectividades por superar diferencias históricas deben ser considerados como uno de los procesos de autocrítica y renovación ideológica más importantes de la historia política de Chile.

¹⁹ Edgardo Boeninger, op cit, p. 364

Especial comentario merece el caso del socialismo, que se encontraba fragmentado y en posiciones muchas veces contrapuestas, como a mediados de los años ochenta en que un sector, el renovado, acercó posiciones con el PDC, mientras otro sector, el almeydismo, más doctrinario, tomaba una postura cercana al histórico eje con el PC. La ruptura de este último sector del socialismo con la extrema izquierda y su proceso de acercamiento al centro político, terminó fortaleciendo finalmente a la coalición. Como señala M. A. Garretón:

"...el camino recorrido mostró que el aprendizaje vivido bajo la dictadura, había fortalecido la responsabilidad de una clase política, cuya incapacidad de concertar en el pasado un acuerdo socio-político mayoritario que asumiera la democracia y el cambio social fue, en gran parte, factor del derrumbe democrático."²⁰

La superación de estas dificultades: el contexto-país, las desconfianzas históricas, la tensión de la renovación ideológica, fueron imprimiendo una ética de la responsabilidad política en el conglomerado opositor, que privilegió la eficacia y los logros más que el testimonio épico; la cooperación y el sentido de la realidad, por sobre el voluntarismo y la ideología.

Esta percepción de la realidad y de lo posible de llevar a cabo, determinó para la Concertación jugar en el esquema institucional que el régimen militar fijó. Y la Concertación venció porque su proyecto político tenía la convicción responsable de representar los anhelos del ciudadano medio desde un discurso cotidiano, y no la imposición del tutelaje proveniente del discurso autoritario. El país había cambiado desde 1973. Y la Concertación de Partidos por el NO y luego por la Democracia, dio cuenta de ello.

Fuentes consultadas

- Eugenio Ortega Frei, Historia de una Alianza, CED-CESOC, 1992
- Manuel Antonio Garretón, La oposición política y el sistema partidario en el régimen militar chileno. Un proceso de aprendizaje para la transición. En: El difícil camino hacia la democracia en Chile 1982-1990, Editores Paul W. Drake e Ivan Jaksic, Flacso, 1993
- Genaro Arriagada, Por la razón o la fuerza. Chile bajo Pinochet. Ed. Sudamericana, 1998
- Edgardo Boeninger K., Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad, Ed. Andrés Bello, 1997
- Revista APSI 1988-1989
- Ascanio Cavallo, et al. La historia oculta del régimen militar, Ed Grijalbo, 1997.

²⁰ Manual Antonio Garretón, op cit, p. 429